



Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Distr. general
2 de mayo de 2012
Español
Original: árabe/inglés

Grupo de examen de la aplicación
Tercer período de sesiones
Viena, 18 a 22 de junio de 2012
Tema 2 del programa provisional*
**Examen de la aplicación de la Convención de
las Naciones Unidas contra la Corrupción**

Resúmenes

Nota de la Secretaría

Adición

Índice

	<i>Página</i>
II. Resúmenes	2
Croacia	2
Marruecos	14

* CAC/COSP/IRG/2012/1.



II. Resúmenes

Croacia

1. Introducción

1.1. Incorporación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en el ordenamiento jurídico de Croacia

Croacia firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción el 10 de diciembre de 2003 y la ratificó el 4 de febrero de 2005. El 24 de abril de 2005 depositó el instrumento de ratificación ante el Secretario General. La legislación de aplicación del instrumento fue aprobada el 4 de febrero de 2005 y entró en vigor el 26 de febrero de 2005.

De acuerdo con el artículo 141 de la Constitución, los acuerdos internacionales forman parte del ordenamiento jurídico interno de la República de Croacia y sus efectos jurídicos tienen precedencia sobre la ley. Es posible modificar o rechazar sus disposiciones solamente en las condiciones y del modo especificados en ellas o de conformidad con las normas generales del derecho internacional.

1.2. Panorama del marco jurídico e institucional establecido en Croacia para combatir la corrupción

El marco jurídico de Croacia en materia de lucha contra la corrupción abarca disposiciones de la Constitución, el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Además, contiene legislación concreta al respecto, como la Ley sobre los Funcionarios Públicos; el Código Laboral; la Ley de Protección de Testigos; la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas; la Ley de procedimientos de decomiso de las ganancias pecuniarias obtenidas por la comisión de delitos y faltas; la Ley de Contratación Pública; la Ley de la Oficina Encargada de la Lucha contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada; la Ley de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo; la Ley de asistencia judicial recíproca en asuntos penales; y la Ley de confidencialidad de los datos.

El órgano especializado en combatir la corrupción es la Oficina de Prevención de la Corrupción y la Delincuencia Organizada. Otros órganos que combaten la corrupción son el Departamento de Lucha contra el Blanqueo de Dinero, cuyas funciones son las de una unidad de inteligencia financiera nacional; la Oficina Estatal de Auditoría; la Administración Tributaria y el Departamento de Aduanas, que son servicios independientes del Ministerio de Hacienda; la Oficina de Contratación Pública; la Comisión de prevención de conflictos de intereses en el cumplimiento de las funciones públicas; y el Sector independiente de lucha contra la corrupción en el Ministerio de Justicia.

2. Aplicación de los capítulos III y IV

2.1. Penalización y aplicación de la ley (Capítulo III)

2.1.1. Principales conclusiones y observaciones

El delito de soborno; tráfico de influencias (artículos 15, 16, 18 y 21)

En los artículos 348 y 347 del Código Penal se penalizan el soborno activo y el soborno pasivo en el sector público, respectivamente¹. A fin de identificar a los autores de esos delitos, en las disposiciones sobre el soborno se recurre a los términos “persona en funciones oficiales” y “persona responsable”, como se define en el artículo 89, párrafos 3 y 7, respectivamente, del Código Penal. El concepto de “beneficio indebido” se introduce en la legislación nacional utilizando el término “regalos o cualquier otra ganancia”. Los tribunales interpretan esto último de manera amplia, aunque no está definido en el Código Penal, en el sentido de dinero, cualquier artículo independientemente de su valor, un derecho o un servicio que se presta sin recompensa u otra contraprestación, y que crea o puede crear en el receptor el sentido de una obligación frente al proveedor.

En las disposiciones pertinentes sobre el soborno no se especifica de manera expresa si los delitos pueden cometerse en forma directa o indirecta. Las autoridades nacionales confirmaron que las disposiciones generales del Código Penal (artículos 36 y 38) sobre la ayuda y la incitación se aplicaban a las situaciones de soborno indirecto y las abarcaban.

En cuanto al soborno en beneficio de terceros, las autoridades nacionales informaron de que en el nuevo Código Penal se abarcaban expresamente los casos de soborno pasivo en que el beneficio indebido estaba destinado a un tercero; respecto del soborno activo, el tipo de personas que se pueden beneficiar de ese delito se describe en términos generales. No se suministró ninguna otra explicación del verdadero significado de la “descripción general” prevista del tipo de personas que se podrían beneficiar del delito de soborno activo.

En los artículos 348 y 347 del Código Penal se penaliza el soborno activo y pasivo en relación con la actuación profesional legal o ilegal de un funcionario público o en relación con cualquier omisión “en el ámbito de su autoridad”. Sin embargo, las autoridades nacionales informaron de que en el nuevo Código Penal se penalizaban explícitamente los actos y omisiones que ocurrían dentro y fuera del ámbito de autoridad de los funcionarios públicos. El equipo de examen estimó que esta última confirmación contribuía a asegurar el cumplimiento del artículo 15 de la Convención.

Las autoridades nacionales confirmaron que las palabras “entregar o prometer un regalo u otro beneficio”, contenidas en el artículo 348 del Código Penal, también abarcaban el ofrecimiento y, sin embargo, agregaron que en el artículo 294b del nuevo Código Penal, relativo a la “concesión de un soborno”, se mencionaba explícitamente el “ofrecimiento” como un elemento del delito. El equipo de examen

¹ Durante el proceso de examen, las autoridades de Croacia también suministraron información sobre las disposiciones relativas al soborno contenidas en el nuevo Código Penal (artículos 293 y 294), aprobado en octubre de 2011 y que entrará en vigor el 1 de enero de 2013.

estimó que esta última confirmación contribuía a asegurar el cumplimiento del artículo 15 a) de la Convención.

Se informó de que los artículos 347 y 348 del Código Penal abarcaban el soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales públicas, porque la definición de “persona en funciones oficiales” incluía también en forma expresa “un funcionario público extranjero, un representante o un funcionario de un órgano representativo extranjero y a un funcionario de una organización internacional de que la República de Croacia es miembro ...”. Sin embargo, los examinadores estimaron que el ámbito de esa definición era más reducido que el de la definición contenida en el artículo 2, apartado c), de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción porque se limitaba a las organizaciones internacionales de que Croacia era miembro.

El soborno en el sector privado se penaliza en su forma activa (artículo 294b del Código Penal) y su forma pasiva (artículo 294a del Código Penal)². Las autoridades nacionales confirmaron que en el nuevo Código Penal se ampliaba el ámbito de los posibles autores más allá de las “personas responsables en una entidad jurídica que realiza transacciones económicas comerciales”, debido a las oraciones “*quienquiera* que en una operación económica comercial solicite o acepte un soborno ...” (en el caso del soborno pasivo) y “... ofrece, promete o concede un soborno *a otra persona* ...” (en el caso del soborno activo). El equipo de examen estimó que esta última confirmación contribuía a asegurar el cumplimiento del artículo 21 de la Convención.

Una cuestión que planteó el equipo de examen al examinar las disposiciones del marco jurídico interno relativas al soborno en el sector privado se relacionó con el comportamiento -previsto o real- del receptor del soborno. Mientras que en el artículo 21 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se abarcan todos los casos en que el receptor de un soborno, “*faltando al deber inherente a sus funciones*, actúe o se abstenga de actuar”, en los artículos 294a y 294b del Código Penal se plantea el requisito de un acto del receptor del soborno que “*cause daños y perjuicios a quien representa*”. El elemento relativo a los daños y perjuicios se mantiene en las disposiciones pertinentes del nuevo Código Penal (artículos 252 y 253). Los examinadores opinaron que esa cláusula parecía reducir innecesariamente el requisito contenido en la Convención y agregaba otro elemento constitutivo a la descripción del delito.

El tráfico de influencias se tipifica como delito en el artículo 343 del Código Penal tanto en su forma activa como en su forma pasiva. En esa disposición se transponen, en gran medida, al ordenamiento jurídico interno los requisitos del artículo 18 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Es interesante observar que en el artículo 343 del Código Penal se incluye de manera explícita el concepto de soborno en beneficio de terceros. Sin embargo, el equipo de examen observó que en el artículo 343 del Código Penal no se contemplaba, al parecer, el abuso de una influencia “*supuesta*”.

² Durante el proceso de examen, las autoridades de Croacia también suministraron información sobre las disposiciones relativas al soborno en el sector privado contenidas en el nuevo Código Penal (artículos 252 y 253), que entrarán en vigor el 1 de enero de 2013.

*Malversación o peculado; abuso de funciones; enriquecimiento ilícito
(artículos 17, 19, 20 y 22)*

En el artículo 345 del Código Penal se penaliza la malversación o peculado. El equipo de examen observó que en esa disposición no se hacía referencia a la posible comisión del delito en beneficio de terceros.

En los artículos 337 y 338 del Código Penal se penaliza el abuso de funciones. El término “*abuso de autoridad*” se interpreta como cualquier comportamiento de un funcionario o una persona responsable que se vale de su cargo o autoridad, sobrepasa los límites de su autoridad u omite cumplir su deber, por lo cual obtiene un beneficio indebido para sí mismo o para otra persona, o causa daños y perjuicios a otra persona.

Las autoridades de Croacia informaron de que el artículo 20, relativo a la penalización del enriquecimiento ilícito, no se había transpuesto al ordenamiento jurídico interno debido a ciertas características concretas del ordenamiento jurídico de Croacia. Sin embargo, recalcaron que, dada la obligación de examinar solamente la penalización de esa conducta, el debate en el grupo de trabajo encargado de la redacción del nuevo Código Penal bastaba para asegurar el cumplimiento del artículo.

Blanqueo del producto del delito; encubrimiento (artículos 23 y 24)

Los evaluadores estimaron que las disposiciones internas básicas relativas a la penalización del blanqueo de dinero (artículo 279 del Código Penal) y el encubrimiento (artículo 236 del Código Penal) eran conformes a lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Además, las autoridades nacionales informaron de que, en el nuevo Código Penal, el ámbito del delito de blanqueo de dinero en las operaciones bancarias, financieras o económicas dejaba de ser limitado. El equipo de examen estimó que esta última confirmación contribuía a asegurar el cumplimiento del artículo 23 de la Convención.

En cuanto a la evaluación de la aplicación de las disposiciones sobre el blanqueo de dinero, los expertos examinadores acogieron con beneplácito el aumento de las declaraciones de culpabilidad de 2005 a 2008 y recalcaron la necesidad de que se actualizaran periódicamente las estadísticas para determinar si se habían hecho nuevos progresos en esa esfera.

Obstrucción de la justicia (artículo 25)

El equipo de examen estimó que las disposiciones internas relativas a la penalización de la obstrucción de la justicia (artículos 309, 317 y 318 del Código Penal) eran conformes al artículo 25 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Participación y tentativa (artículo 27)

El equipo de examen observó que en el artículo 33 del Código Penal se sancionaban solamente las tentativas de cometer delitos punibles con cinco años de prisión o más o las tentativas cuya pena se señalara en forma concreta. Las autoridades nacionales subrayaron que, dado que las sanciones por el delito de soborno eran más severas en

el nuevo Código Penal, se penalizaría también la tentativa de cometer ese delito. El equipo de examen acogió con beneplácito esta última explicación.

Responsabilidad de las personas jurídicas (artículo 26)

Croacia ha introducido en su ordenamiento jurídico la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En la Ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas se prevén dos tipos de sanciones cuando la persona jurídica es declarada penalmente responsable: penas consistentes en multas y en la extinción de la personalidad jurídica; y medidas de seguridad, entre ellas la prohibición del ejercicio de la profesión, el decomiso y la publicación del veredicto.

Proceso, fallo y sanciones; cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley (artículos 30 y 37)

El equipo de examen, al examinar las sanciones aplicables a las personas naturales involucradas en los delitos relacionados con la corrupción, observó que podría ser necesario estudiar la posibilidad de aumentar las penas por los delitos relacionados con el soborno activo en los sectores público y privado. En su respuesta, las autoridades nacionales indicaron que las penas por los delitos relacionados con el soborno activo y pasivo en el sector público, así como por los delitos relacionados con el soborno activo en el sector privado, eran más severas en el nuevo Código Penal. El equipo de examen acogió con beneplácito ese hecho.

En Croacia, los funcionarios públicos no gozan de inmunidad, excepto el Presidente de la República y los diputados parlamentarios. Sin embargo, de conformidad con la Constitución y la legislación, es posible levantar esa inmunidad. Se informó de que, desde un punto de vista práctico, la inmunidad no había afectado al enjuiciamiento en los casos de corrupción, porque siempre se la había levantado cuando se había solicitado.

El sistema de justicia penal en Croacia se basa en el principio de la acusación obligatoria y los servicios de fiscalía se atienen al principio de legalidad. Sin embargo, en la legislación se permite al Fiscal General desestimar una denuncia penal o abstenerse de acusar a los miembros de una organización delictiva que declaren como testigos en un juicio, si la declaración “es importante para descubrir los delitos y a los miembros de la organización delictiva”. Es posible reconocer circunstancias atenuantes. Los testigos que cooperan son considerados testigos que gozan de protección.

Protección de testigos y denunciantes (artículos 32 y 33)

Croacia ha establecido un marco jurídico amplio para la protección de los testigos, los peritos, las víctimas consideradas testigos y las personas de su círculo íntimo, sobre la base de las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Criminal (artículos 294 a 299) y la Ley de Protección de Testigos, en que se definen de manera amplia las personas a las que se debe proteger. Se han concertado también acuerdos de cooperación policial con Austria, Bosnia y Herzegovina y Francia en que se reglamenta la protección de los testigos.

A pesar de la existencia de un vínculo entre las disposiciones de la legislación laboral y la legislación sobre los funcionarios públicos acerca de la protección de los denunciantes, no hay todavía en Croacia legislación especial que asegure la

protección de estos, como se estipula en el artículo 33 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (disposición no vinculante).

Embargo preventivo, incautación y decomiso; secreto bancario (artículos 31 y 40)

En el marco jurídico interno se reglamentan en detalle los requisitos y condiciones de las medidas cautelares con respecto al producto del delito, incluida su incautación. Se estima que el decomiso es una medida penal especial de carácter obligatorio y que se puede aplicar al producto y los instrumentos de un delito. El 15 de diciembre de 2010 se aprobó nueva legislación sobre el decomiso. El 1 de abril de 2011 se estableció el organismo AUDIO, de gestión de los bienes estatales, como órgano encargado de la gestión de los bienes decomisados.

En el artículo 265 de la Ley de Enjuiciamiento Penal se estipulan las condiciones para levantar el secreto bancario, a fin de facilitar la investigación de los delitos.

Prescripción; antecedentes penales (artículos 29 y 41)

Las autoridades nacionales informaron de que en el nuevo Código Penal se aumentaba considerablemente el plazo de prescripción. En el caso de los delitos cuya pena de prisión es de más de un año, el plazo de prescripción será de diez años y en el caso de los delitos que se sancionan con pena de prisión de hasta un año o con pena de multa, el plazo de prescripción será de seis años. No se suministró información concreta acerca de si se podía prorrogar el plazo de prescripción en caso de que el acusado eludiera la justicia.

Al evaluar las medidas nacionales destinadas a tener en cuenta las declaraciones de culpabilidad anteriores en Estados extranjeros por delitos relacionados con la corrupción, los expertos examinadores observaron que Croacia estaba dispuesta a aplicar, cuando se adhiriera a la Unión Europea, las decisiones marco relativas a la aplicación de los principios de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias y de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad.

Jurisdicción (artículo 42)

En los artículos 14 a 16 del Código Penal se establecen los principios de jurisdicción, incluidas normas relativas a la territorialidad y la personalidad activa y pasiva, que se aplican a todos los delitos previstos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En el artículo 14 del Código Penal se establece la jurisdicción con respecto a los delitos cometidos en el extranjero por ciudadanos extranjeros contra el Estado de Croacia y se permite aplicar la legislación penal nacional con respecto a los delitos cometidos por una persona que se encuentra en el territorio nacional y a la que no se extradita al Estado requirente. Si el acto cometido en el extranjero no constituye un delito de acuerdo con la legislación del Estado en que se ha cometido, solamente se podrán iniciar actuaciones penales internas cuando lo apruebe el Fiscal General.

*Consecuencias de los actos de corrupción; indemnización por daños y perjuicios
(artículos 34 y 35)*

Con respecto a las consecuencias de los actos de corrupción, las autoridades nacionales se remitieron a la Ley de Contratación Pública e informaron de que los contratos públicos celebrados en forma contraria a esa Ley serían nulos y carecerían de validez.

Toda persona natural o jurídica que haya sufrido daños y perjuicios como resultado de un acto de corrupción está facultada, de acuerdo con la legislación interna (artículos 153 a 162 del Código de Enjuiciamiento Criminal), a recibir indemnización con sujeción a un fallo en que un tribunal reconozca ese derecho.

*Autoridades especializadas y cooperación entre los organismos
(artículos 36, 38 y 39)*

La Oficina de Prevención de la Corrupción y la Delincuencia Organizada, establecida en 2001, es un órgano especializado en combatir la corrupción y la delincuencia organizada y funciona dentro del mecanismo institucional de la Oficina del Fiscal General. Cumple funciones de inteligencia, investigación, acusación y prevención y también se encarga de la cooperación internacional y el intercambio de información en investigaciones complejas.

Las autoridades de Croacia hicieron referencia a varias iniciativas destinadas a mejorar el intercambio de información y fortalecer la cooperación entre los organismos nacionales encargados de la aplicación de la ley. Los examinadores recalcaron la necesidad de contar con la mejor coordinación y cooperación posible entre los organismos internos encargados de combatir la corrupción.

2.1.2. Logros y buenas prácticas

Los expertos examinadores indicaron que la penalización de una amplia gama de conductas relacionadas con la corrupción era una importante virtud de la legislación de Croacia destinada a combatir la corrupción. Se consideró que ello era el resultado de un proceso evolutivo de reforma legislativa en que se tenían en cuenta la adhesión del país a todos los tratados internacionales importantes de lucha contra la corrupción y su participación como miembro en los mecanismos internacionales para vigilar esa lucha. En consecuencia, no solamente las disposiciones obligatorias, sino también casi todas las disposiciones facultativas sobre la penalización contenidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción formaban parte integrante del ordenamiento jurídico interno.

El equipo de examen acogió con beneplácito, además, las buenas prácticas destinadas a aumentar la eficacia de la penalización y la aplicación de la ley en la lucha contra la corrupción, como la muy amplia definición del término “regalos o cualquier otra ganancia” y el establecimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Los examinadores pusieron de relieve las siguientes novedades positivas, que, debido al período de transición hasta la entrada en vigor del nuevo Código Penal, no se podían considerar aún elementos plenamente integrados en la legislación nacional para combatir la corrupción:

- La ampliación del ámbito de aplicación del delito de soborno pasivo para abarcar los casos en que el beneficio indebido está destinado a un tercero;
- La penalización como delitos de soborno de los actos y omisiones dentro y fuera del ámbito de la autoridad de un funcionario público;
- La ampliación al sector privado del ámbito de posibles autores de delitos de soborno;
- La supresión del requisito restrictivo relativo a la comisión de delitos de blanqueo de dinero en el contexto de las “operaciones bancarias, financieras y demás operaciones económicas”;
- El aumento de las sanciones por actos de soborno activo y pasivo en el sector público, así como por actos de soborno activo en el sector privado; y
- La prórroga del plazo de prescripción de los delitos cuya pena de prisión es de más de un año o que se sancionan con pena de prisión de hasta un año o con pena de multa.

2.1.3. Problemas y recomendaciones

Los examinadores, si bien observaron los esfuerzos considerables y continuos de Croacia por lograr, en su ordenamiento jurídico nacional, el pleno cumplimiento de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en la esfera de la penalización, también indicaron algunos aspectos mejorables y formularon las siguientes recomendaciones para que las autoridades nacionales competentes adoptaran medidas o las examinaran (según el carácter obligatorio o facultativo de los requisitos pertinentes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción):

- Asegurar la ampliación del ámbito de aplicación de los delitos de soborno activo y malversación o peculado para abarcar los casos en que el beneficio indebido está destinado a un tercero;
- Asegurar que se amplíe el ámbito de la definición de “persona en funciones oficiales” para asegurar su plena concordancia con la definición de “funcionario de una organización internacional pública”, contenida en el artículo 2, apartado c), de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y, en consecuencia, abarcar a los funcionarios de las organizaciones internacionales públicas en general y no solamente a los de las organizaciones de que Croacia es miembro;
- Estudiar la posibilidad de enmendar la legislación de manera que se permita la penalización del soborno activo y pasivo en el sector privado independientemente de los daños y perjuicios causados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción;

- Aclarar la interpretación de la disposición sobre el tráfico de influencias, de manera que abarque inequívocamente los casos de abuso de “influencia” no solamente “real”, sino también “supuesta”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción;
- Asegurar que en la legislación nacional se estipule la interrupción de la prescripción cuando el presunto delincuente haya eludido la administración de justicia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción;
- Tener en cuenta la necesidad de adoptar legislación concreta sobre la protección de los denunciantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción;
- Seguir realizando esfuerzos por facilitar la mejor coordinación posible entre los organismos cuyo mandato es aplicar la ley en la lucha contra la corrupción.

2.2. Cooperación internacional (capítulo IV)

2.2.1. Principales conclusiones y observaciones

Extradición; traslado de personas condenadas a cumplir una pena; remisión de actuaciones penales (artículos 44, 45 y 47)

En la Ley de Asistencia Judicial Recíproca en Asuntos Penales se reglamentan las condiciones sustantivas y procesales de la extradición. La legislación destinada a incorporar en el ordenamiento jurídico interno la Decisión Marco del Consejo de Europa relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, de 2002, entrará en vigor cuando Croacia se adhiera a la Unión Europea. Ello entrañará la abolición del requisito de la doble incriminación respecto de los delitos punibles mediante una condena de prisión de tres años como máximo (el blanqueo de dinero y algunos delitos relacionados con la corrupción pertenecen a esta categoría).

Croacia no supedita la extradición a la existencia de un tratado, ni actúa en esa esfera exclusivamente sobre la base de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En casos concretos, Croacia extraditará a una persona solicitada por delitos contemplados en la Convención a un país que no sea parte en la Convención, sobre la base del principio de reciprocidad (artículo 17 de la Ley de Asistencia Judicial Recíproca en Asuntos Penales).

En el artículo 35 de la Ley de Asistencia Judicial Recíproca en Asuntos Penales se enumeran las razones por las que es posible denegar una solicitud de extradición, entre ellas la nacionalidad, la inexistencia de doble incriminación, la cláusula sobre la discriminación, la territorialidad, el tiempo transcurrido y *ne bis in idem*. En la Ley se estipula también un procedimiento de extradición simplificado (artículo 54).

En la Constitución (artículo 9) se prohíbe la extradición de los nacionales, a menos que se trate de ejecutar una decisión sobre un caso de extradición o entrega en cumplimiento de un tratado internacional o del acervo comunitario de la Unión Europea.

No se suministró información concreta sobre la aplicación práctica del axioma “*aut dedere aut judicare*” en lugar de la extradición (véase el artículo 44, párrafo 11, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción). Las autoridades de Croacia explicaron que la medida consistente en iniciar un proceso interno cuando se denegaba la extradición se utilizaba raramente en la práctica, porque todos los países en que se había cometido un delito preferían que el proceso judicial contra el autor tuviera lugar ante sus propios tribunales.

La entrega condicional de los nacionales, prevista en el artículo 44, párrafo 12, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, se reglamenta en las normas relativas a la aplicación de la Decisión Marco del Consejo Europeo relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, que entrarán en vigor cuando Croacia se adhiera a la Unión Europea.

Croacia cumple los tratados multilaterales en vigor, como el Convenio europeo sobre extradición del Consejo de Europa y sus dos Protocolos Adicionales y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Croacia también ha concertado tratados de extradición bilaterales con Eslovenia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro y Serbia, en que se permite la extradición de nacionales y se simplifican los requisitos probatorios en los procedimientos de extradición.

Los examinadores observaron que el sistema existente de gestión de casos que utilizaba el Ministerio de Justicia no permitía hacer un seguimiento de los casos de extradición sobre la base de datos estadísticos. Subrayaron que la falta de ejemplos concretos y de datos estadísticos dificultaba la evaluación de la aplicación de algunas disposiciones del artículo 44 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Las autoridades de Croacia, en su respuesta, confirmaron que el Ministerio de Justicia se proponía mejorar el sistema de gestión de casos en los próximos dos años. El Ministerio de Justicia registraba los datos sobre la duración exacta de los períodos de detención en los casos de extradición.

Con respecto al traslado de personas condenadas a cumplir una pena, las autoridades de Croacia se remitieron a los acuerdos bilaterales concertados con países europeos y a otros tratados multilaterales en que el país era parte (el Convenio sobre el traslado de personas condenadas (1983) del Consejo de Europa y su Protocolo Adicional (1997); la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional). Se informó también sobre el marco jurídico interno que permitía ejecutar condenas penales extranjeras (artículo 70 de la Ley de Asistencia Judicial Recíproca en Asuntos Penales).

En los artículos 62 a 69 de la Ley de Asistencia Judicial Recíproca en Asuntos Penales se reglamenta la remisión de actuaciones penales desde y hacia Croacia. Es posible remitir un proceso penal a un país extranjero en el caso de un delito cuya sanción prevista es de diez años de prisión como máximo.

Asistencia judicial recíproca (artículo 46)

Se informó de que se prestaba asistencia judicial recíproca “en el sentido más amplio”, también en los casos relativos a personas jurídicas, y en cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Asistencia Judicial Recíproca en Asuntos Penales y el Código de Enjuiciamiento Criminal.

En los artículos 12 y 13 de la Ley de Asistencia Judicial Recíproca en Asuntos Penales se estipulan las razones para denegar una solicitud de asistencia judicial recíproca y entre ellas figuran tanto razones opcionales como razones obligatorias. No se puede denegar una solicitud de asistencia judicial recíproca solamente porque se relacione con delitos fiscales. El secreto bancario no parece constituir un obstáculo para prestar asistencia.

La doble incriminación no es un requisito en la Ley de Asistencia Judicial Recíproca en Asuntos Penales, en la que, en cambio, se estipula solamente que se debe prestar asistencia “respecto de actos penales cuya sanción, en el momento de la solicitud de asistencia, incumbe a la jurisdicción del Estado requirente” (artículo 1, párrafo 2).

Croacia notificó al Secretario General que el Ministerio de Justicia era la autoridad central competente y autorizada para examinar las solicitudes de asistencia judicial recíproca. El Ministerio de Justicia transmite y recibe las solicitudes de asistencia judicial recíproca por conducto del Ministerio de Asuntos Exteriores (cuando el Estado extranjero no ha concertado un tratado internacional en vigor con Croacia o cuando en un tratado internacional se prevé el recurso a conductos diplomáticos especiales). En casos urgentes y con sujeción a la reciprocidad, es posible transmitir las solicitudes de asistencia judicial recíproca por conducto de la INTERPOL.

Las solicitudes de asistencia judicial recíproca se cumplen, por regla general, de conformidad con el derecho interno y, previa solicitud del Estado requirente, de conformidad con las formalidades previstas en la legislación de ese Estado, si ello no es contrario a la legislación de Croacia.

Croacia ha concertado tratados bilaterales de asistencia judicial recíproca con Bosnia y Herzegovina, Eslovenia, la ex República Yugoslava de Macedonia y Montenegro. Además, Croacia coopera con la Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea (Eurojust) y la Red Judicial Europea.

Las autoridades de Croacia, en respuesta a indagaciones acerca de los planes para asegurar la vigilancia y el rastreo de los casos de asistencia judicial recíproca y el registro de las actuaciones a ese respecto, reiteraron su intención de mejorar el sistema nacional de gestión de casos.

Cooperación en materia de cumplimiento de la ley; investigaciones conjuntas; técnicas especiales de investigación (artículos 48, 49 y 50)

La cooperación en materia de cumplimiento de la ley, incluido el intercambio de información, se facilita por diversas disposiciones internas, así como por la aplicación de los acuerdos bilaterales celebrados, entre otros países, con Alemania, Austria, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Eslovaquia, los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Francia, Hungría, Israel, Malta, Montenegro, la República de Moldova y Serbia.

Croacia coopera con Europol y la INTERPOL. También se puede destinar a agentes de la policía a las embajadas y los consulados de Croacia en el extranjero, como “funcionarios de enlace”.

Los acuerdos sobre investigaciones conjuntas se celebran caso por caso. No se suministró más información sobre el modo en que se establecían en casos concretos órganos mixtos de investigación ni sobre los criterios que se aplicaban a la composición de esos órganos.

En los artículos 332 y 333 del Código de Enjuiciamiento Criminal se reglamentan las técnicas especiales de investigación, mientras que las técnicas especiales de investigación que se emplean a nivel internacional se reglamentan caso por caso.

2.2.2. Logros y buenas prácticas

El equipo de examen llegó a la conclusión de que Croacia había establecido un marco de cooperación internacional amplio y sólido. A continuación figuran algunos ejemplos particularmente valiosos de los esfuerzos de Croacia por fortalecer sus mecanismos y redes de cooperación internacional:

- El hecho de que Croacia sea parte en instrumentos regionales que entrañan diferentes formas de cooperación internacional, así como en instrumentos multilaterales relativos a la corrupción, el blanqueo de dinero y la delincuencia organizada que contienen disposiciones sobre la cooperación internacional en asuntos penales;
- El hecho de que Croacia esté dispuesta a aplicar a nivel interno, cuando se adhiera a la Unión Europea, instrumentos jurídicos innovadores sobre la cooperación internacional en asuntos penales;
- La celebración de acuerdos bilaterales de extradición en que se estipulan condiciones menos estrictas que las estipuladas en la legislación interna (extradición de los nacionales; simplificación de los requisitos probatorios en los procedimientos de extradición);
- La práctica de prestar asistencia judicial recíproca “en un sentido amplio” y sin necesidad de que haya doble incriminación;
- La celebración con Eurojust, Europol y la INTERPOL de acuerdos destinados a facilitar la asistencia judicial entre Estados y la cooperación en materia de cumplimiento de la ley;
- La participación activa en el Grupo de Estados contra la Corrupción, establecido por el Consejo de Europa, y, a nivel operacional, en PACO IMPACT, proyecto regional administrado por el Consejo de Europa y que se centra en la aplicación de planes de lucha contra la corrupción en Europa sudoriental;
- La participación de Croacia como miembro activo en el Consejo de Cooperación Regional (antes Pacto de Estabilidad) y la Iniciativa regional contra la corrupción para los países balcánicos.

2.2.3. Problemas y recomendaciones

A continuación se señalan a la atención de las autoridades de Croacia recomendaciones de medidas que podrían adoptar o examinar (en función de que los requisitos pertinentes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción tengan carácter obligatorio o facultativo) para seguir mejorando los mecanismos de cooperación internacional:

- Proseguir y racionalizar los esfuerzos destinados a mejorar el sistema nacional de gestión de casos para dar seguimiento a las solicitudes de asistencia judicial recíproca;

- Aumentar los esfuerzos por sistematizar la información sobre los casos de extradición y reunir datos estadísticos pertinentes, a fin de facilitar la vigilancia de esos casos y evaluar más eficientemente la eficacia de la aplicación de los arreglos de extradición;
- Estudiar la posibilidad de liberalizar aún más la aplicación estricta del requisito de la doble incriminación, de conformidad con el artículo 44, párrafo 2, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y aplicar un enfoque flexible similar que no se limite al caso de la ejecución de las órdenes de detención europeas;
- Sistematizar y utilizar del mejor modo posible la información sobre las investigaciones conjuntas, incluida información sobre los medios y criterios empleados, para establecer órganos mixtos de investigación;
- Seguir explorando activamente oportunidades de celebrar acuerdos bilaterales y multilaterales con otros países (en particular, países no europeos), a fin de fomentar la eficacia de diferentes formas de cooperación internacional;
- Estudiar la posibilidad de asignar más recursos al fortalecimiento de la eficiencia y capacidad de los mecanismos de cooperación internacional.

3. Necesidades de asistencia técnica

Las autoridades de Croacia indicaron que sería provechoso que recibieran asistencia técnica relacionada con la aplicación del artículo 20 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (enriquecimiento ilícito) por medio de un compendio de buenas prácticas o lecciones adquiridas y legislación modelo. Además, pusieron de relieve el hecho de que también sería útil un compendio de buenas prácticas o lecciones adquiridas respecto de la aplicación del artículo 44, párrafo 2, de la Convención (no aplicación del requisito de la doble incriminación en los procedimientos de extradición). Las autoridades informaron de que la Comisión Europea ya prestaba asistencia técnica sobre esa última cuestión.

Marruecos

Ordenamiento jurídico

El Reino de Marruecos es una monarquía constitucional, democrática, parlamentaria y social. El 1 de julio de 2011 entró en vigor una nueva Constitución, aprobada en un referéndum. En la Constitución se reconoce la primacía de los tratados internacionales con respecto a la legislación nacional. El Primer Ministro aprueba los tratados internacionales, que el Rey firma. No es necesario que el Parlamento apruebe los tratados para que entren en vigor, excepto los tratados que se relacionan con las finanzas del Estado.

Marruecos firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (la Convención) el 9 de diciembre de 2003 y la ratificó el 9 de mayo de 2007. La Convención entró en vigor el 30 de noviembre de 2007. Las autoridades de Marruecos pueden aplicar directamente las disposiciones de la Convención de aplicación automática.

Las principales instituciones encargadas de prevenir y combatir las prácticas corruptas en Marruecos son las siguientes: el Órgano Central de Prevención de la Corrupción (establecido en virtud del capítulo 36 de la Constitución, en que se estipula la creación de un órgano nacional encargado de la integridad y de la prevención y supresión de la corrupción); la Dependencia de Procesamiento de Información Financiera; la Oficina del Fiscal General y la policía; la Inspección General de Hacienda; la Inspección General de Administración Territorial; y los Tribunales Financieros (el Consejo Superior de Cuentas y los Consejos Regionales de Cuentas).

Los instrumentos jurídicos que se utilizan para aplicar la Convención en Marruecos son los siguientes: el Código Penal aprobado en 1962, que se ha modificado en varias ocasiones; el Código de Enjuiciamiento Criminal aprobado en 2002; el Código de los Tribunales Financieros aprobado en 2002; la Ley núm. 43-05 para combatir el blanqueo de dinero, aprobada en 2007; la Ley núm.10-13, aprobada en 2011, por la que se modifica la legislación para combatir el blanqueo de dinero; y, con respecto a los delitos en el sector privado, el Código Comercial y la Ley de Sociedades, que se aprobaron en 1996. Es aplicable también una serie de tratados bilaterales en la esfera de la asistencia judicial recíproca, celebrados por ejemplo con España, los Estados Unidos de América, Francia, los Países Bajos y Portugal.

En Marruecos, el proceso penal consta de tres fases, a saber, las pesquisas preliminares y la investigación preparatoria, la investigación a cargo de un juez (el juez de instrucción) y el juicio. En las pesquisas preliminares intervienen todos los departamentos pertinentes encargados de la aplicación de la ley, incluida la policía judicial, que supervisa la Oficina del Fiscal General. Las dependencias policiales responsables de combatir los delitos económicos investigan los casos relacionados con la corrupción. Una vez concluida la primera fase, la fiscalía presenta los casos sobre los que no se necesitan más investigaciones directamente al tribunal para que los oiga y dicte sentencia. Si se requieren más pruebas, la fiscalía transmite el caso a un juez para que se realicen nuevas investigaciones. Una vez concluida la investigación, se presenta el caso al tribunal competente para que lo oiga y dicte sentencia.

Penalización y aplicación de la ley

Penalización

La mayor parte de los delitos enumerados en la Convención se tipifican como tales en el Código Penal de Marruecos y otros textos jurídicos, como la Ley núm. 43-05 sobre el blanqueo de dinero.

La novedad más importante en Marruecos en los últimos años, con respecto a la penalización de los delitos relacionados con la corrupción, es la aprobación de la Ley núm. 13-10, por la que se modificó la Ley núm. 43-05 sobre el blanqueo de

dinero. Se debate asimismo sobre un proyecto de enmienda del Código Penal, por el que también se introducirán cambios con respecto a los delitos relacionados con la corrupción.

El soborno de los funcionarios públicos nacionales parece adecuadamente cubierto en la legislación de Marruecos, si bien se ha observado que en el Código Penal no se hace expresamente referencia al soborno cometido de manera indirecta o por conducto de intermediarios. En cambio, los expertos examinadores observaron que la legislación de Marruecos no contenía ninguna disposición concreta adecuada en que se penalizara el soborno de funcionarios públicos extranjeros e identificaron la inexistencia de una disposición de esa índole como uno de los problemas que existían con respecto a la aplicación de la Convención en Marruecos. El país informó de que esa cuestión se tenía en cuenta en el proyecto de enmienda del Código Penal que todavía era objeto de debate.

Las disposiciones del Código Penal de Marruecos por las que se penaliza el tráfico de influencias no parecen reflejar plenamente los elementos del delito previstos en la Convención, porque no se hace hincapié en la influencia ejercida. Asimismo, se observa una divergencia entre el texto de la Convención y las disposiciones pertinentes del Código Penal de Marruecos con respecto a los delitos de encubrimiento y abuso de funciones.

Sin embargo, es importante observar que el delito de alevosía constituye una forma de abuso de poder que, en la legislación de Marruecos, se sanciona con un máximo de cinco años de prisión.

El Estado de Marruecos ha declarado que no ha adoptado medidas para tipificar como delito el enriquecimiento ilícito. Además, aunque Marruecos ha aplicado el apartado a) del artículo 25 de la Convención penalizando la obstrucción de la justicia que tiene lugar al obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas, en la legislación del país no se cumple plenamente lo dispuesto en el apartado b) del artículo 25 de la Convención, porque el hecho de obstaculizar las labores de los funcionarios encargados de la administración de justicia o la aplicación de la ley se sanciona solamente si sus autores son también funcionarios públicos. Las sanciones en vigor por la obstrucción de la justicia parecen más bien indulgentes, lo cual plantea preocupaciones acerca de su efecto disuasivo.

Aunque en el Código Penal y la Ley núm. 43-05 se reglamenta de manera exhaustiva la penalización del blanqueo del producto del delito, en la legislación de Marruecos no siempre se cumplen plenamente las disposiciones de los artículos pertinentes de la Convención. En la Ley núm. 3-10, aprobada en enero de 2011, se enmendaron las disposiciones legales de Marruecos sobre el blanqueo de dinero, a saber, se amplió considerablemente el alcance de los delitos determinantes para incluir el blanqueo de dinero, se penalizó la tentativa de blanquear dinero y se mejoraron el marco y las medidas para la prevención del blanqueo de dinero.

La corrupción y la malversación o peculado de bienes en el sector privado, así como la malversación o peculado, la apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes, se penalizan en cumplimiento de la disposición correspondiente de la Convención. Sin embargo, las sanciones por malversación o peculado en el sector privado son indulgentes y su efecto disuasivo podría ser limitado.

Aunque en la legislación penal de Marruecos no figura ninguna disposición concreta en que se establezca en términos generales la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en varios artículos del Código Penal se disponen sanciones penales y medidas de disuasión destinadas a las personas jurídicas que puedan ser responsables de determinados delitos, y ello incluye disposiciones en que se sanciona el blanqueo de dinero. Por ello, las autoridades de Marruecos aducen que en la legislación del país sí se reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Las disposiciones en que se reglamenta el derecho penal general, aplicable a todos los delitos, abarcan la participación y la tentativa. Se estima que la prescripción, tal como se contempla en la legislación de Marruecos, es suficiente y puede ser interrumpida por cualquier acto de investigación.

En general, con respecto a la aplicación de los requisitos de la Convención sobre la penalización, los expertos examinadores formularon las siguientes observaciones:

- Incluir en las disposiciones legislativas pertinentes una mención concreta de la comisión directa o indirecta del delito.
- Poner en marcha procesos legislativos para penalizar, concreta e inequívocamente, el soborno de los funcionarios públicos extranjeros y los funcionarios de organizaciones internacionales públicas.
- Estudiar la posibilidad de reformar la legislación relativa al tráfico de influencias y el abuso de funciones, a fin de que refleje mejor las disposiciones de la Convención.
- Estudiar la posibilidad de tipificar el enriquecimiento ilícito como delito y, con ese fin, aprovechar la asistencia técnica disponible.
- Modificar la legislación en materia de obstrucción de la justicia a fin de incluir todos los requisitos estipulados en el artículo 25, apartado b), de la Convención, así como imponer penas más severas y de carácter más disuasivo.
- Revisar la reglamentación sobre la responsabilidad de las personas jurídicas con respecto a los delitos relacionados con la corrupción.

Aplicación de la ley

En general, se podrían fortalecer las sanciones aplicables a los delitos relacionados con la corrupción en la legislación de Marruecos, a fin de asegurar sus efectos disuasivos y reflejar adecuadamente la gravedad de los actos.

En la nueva Constitución del Reino de Marruecos, aprobada en julio de 2011, se limita el alcance de la inmunidad de que gozan los parlamentarios y los magistrados. En la legislación de Marruecos se tienen suficientemente en cuenta los requisitos para conceder la libertad a los acusados en espera de juicio o conceder la libertad condicional a las personas que hayan sido declaradas culpables, pero se necesitan medidas más concretas e inequívocas con respecto a la destitución, suspensión o reasignación de los funcionarios públicos involucrados en actividades de corrupción, así como con respecto a su inhabilitación para desempeñar un cargo público.

En la legislación de Marruecos existen vacíos con respecto al decomiso del producto de los delitos tipificados de conformidad con la Convención, porque las disposiciones legislativas sobre el decomiso parecen aplicarse en el país solamente a los instrumentos utilizados en los delitos y no al producto del delito. Asimismo, esos vacíos se subsanaron parcialmente mediante las modificaciones introducidas en la legislación contra el blanqueo de dinero, en virtud de las cuales se hizo obligatorio el decomiso de todo producto del delito en casos de blanqueo de dinero.

Se puede decomisar el equipo o los instrumentos utilizados en un delito sin una declaración de culpabilidad, mientras que para decomisar el producto del delito, cuando ello está permitido, se necesita una declaración de culpabilidad. Además, está permitido el embargo preventivo de los presuntos instrumentos y el presunto producto del delito antes de que haya una declaración de culpabilidad. Solamente un juez puede ordenar el decomiso y el embargo preventivo de activos. Los bancos y las instituciones financieras tienen la obligación de cooperar con la fiscalía y suministrar la información que esta solicite en relación con los presuntos movimientos irregulares de fondos. En la legislación de Marruecos no figura ninguna disposición que prevea la obligación del acusado de demostrar que el origen del presunto producto del delito es en realidad lícito, como se estipula en el párrafo 8, facultativo, del artículo 31 de la Convención.

En la legislación en vigor de Marruecos se establece un marco adecuado para proteger a los testigos, los peritos y las víctimas, pero no se incluye un programa concreto y amplio de protección de los testigos. Se espera que con las modificaciones del Código de Enjuiciamiento Criminal se fomente la protección de los testigos, los peritos y los denunciantes, reflejando así el régimen amplio estipulado en la Convención. La legislación en vigor para combatir el blanqueo de dinero ya contiene disposiciones sobre la protección de las personas que denuncian de buena fe transacciones sospechosas.

En el ordenamiento jurídico de Marruecos se reconoce el derecho de cualquier persona que haya sufrido daños y perjuicios por un delito de comparecer como parte civil y solicitar indemnización en un proceso penal o de iniciar un procedimiento judicial ante un tribunal civil. En caso de que un proceso de contratación pública se vea afectado por un acto de corrupción, en la legislación de Marruecos se estipula la anulación de la licitación y la exclusión del proveedor de servicios de futuros contratos con las autoridades públicas.

En el proceso de examen se determinó que no se había establecido ningún órgano especializado en combatir la corrupción mediante la aplicación de la ley. El Órgano Central de Prevención de la Corrupción y la Dependencia de Inteligencia Financiera son elementos importantes en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, entre sus funciones no figura la aplicación de la ley. Se recomendó que se estableciera una capacidad especializada en la aplicación de la ley para hacer frente a los delitos de corrupción. Se esperaba que ello se tuviera en cuenta en el proyecto de legislación sobre el que se debatía actualmente y en virtud del cual habría equipos especializados en la lucha contra la corrupción integrados por fiscales capacitados que actuarían de consuno con los funcionarios de los Ministerios del Interior y de Hacienda y con las instituciones financieras.

Durante el diálogo, se hizo referencia a algunos nuevos textos legislativos en los que se estipulaba, entre otras cosas, el establecimiento de equipos nacionales y regionales de la policía judicial, a los que se encomendaban tareas especiales, incluidas pesquisas e investigaciones sobre los delitos financieros y económicos. Sin embargo, en el proceso de examen del país no se pudo examinar adecuadamente el contenido de esos textos.

En la legislación de Marruecos no se prevé un régimen amplio de incentivos para alentar la cooperación de las personas que han participado en delitos con las autoridades encargadas de la aplicación de la ley. Además, en la legislación de Marruecos no se permite la negociación de los cargos y la condena. El intercambio de información entre las autoridades públicas y las autoridades encargadas de la aplicación de la ley se lleva a cabo por conducto del Órgano Central de Prevención de la Corrupción y de la Dependencia de Inteligencia Financiera, que están facultados para solicitar información a las instituciones y los órganos públicos. Asimismo, la Inspección de Hacienda en el Ministerio de Economía y Hacienda notifica a las autoridades encargadas de la aplicación de la ley las irregularidades detectadas mediante controles o auditorías en el sector público.

La jurisdicción del Reino de Marruecos respecto de los delitos se rige por el Código de Enjuiciamiento Criminal y en las disposiciones generales se cumplen los requisitos en materia de jurisdicción estipulados en los párrafos 1 a 3 del artículo 42 de la Convención.

Los expertos examinadores formularon las siguientes observaciones con respecto a la aplicación de los requisitos de la Convención en la esfera de la aplicación de la ley:

- Alentar a Marruecos a estudiar la posibilidad de adoptar medidas amplias y concretas relativas al embargo preventivo, la incautación y el decomiso del producto del delito, como se estipula en el artículo 31 de la Convención, incluido el decomiso de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto, y la obligación de que un delincuente demuestre el origen lícito del presunto producto del delito.
- Estudiar la posibilidad de adoptar sanciones más estrictas por la comisión de delitos relacionados con la corrupción, a fin de asegurar que sean eficientes y proporcionales y tengan efectos disuasivos.

Cooperación internacional

De acuerdo con el Código de Enjuiciamiento Criminal de Marruecos, los tratados internacionales tienen prelación sobre la legislación interna en asuntos de cooperación internacional. Las disposiciones generales del Código de Enjuiciamiento Criminal de Marruecos (sección III del título VII), incluidas las disposiciones sobre la extradición, se aplican a los asuntos no reglamentados en los tratados bilaterales o multilaterales. Se estima que Marruecos cumple los principales requisitos estipulados en la Convención en la esfera de la cooperación internacional.

Extradición

En Marruecos se reglamentan en un capítulo del Código de Enjuiciamiento Criminal los requisitos y procedimientos de la extradición. Marruecos ha concertado varios tratados bilaterales en materia de extradición, pero no supedita la extradición a la existencia de un tratado. Si no existe un tratado aplicable, puede conceder la extradición de conformidad con las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Criminal.

No se puede extraditar a los nacionales de Marruecos, pero se los puede juzgar en el país por delitos cometidos en el extranjero, si otro país lo solicita oficialmente a las autoridades de Marruecos (*aut dedere aut judicare*). En el mismo contexto, las autoridades de Marruecos se abstienen de estudiar la posibilidad de ejecutar las condenas impuestas por una autoridad extranjera a un nacional de Marruecos.

Marruecos exige que se respete en todos los casos el principio de la doble incriminación, porque no concede la extradición si el acto no es punible con arreglo a su derecho interno. Marruecos no puede conceder la extradición de una persona, a su discreción, por ningún delito contemplado en la Convención que no sea punible con arreglo a su derecho interno, como se estipula en el párrafo 2 del artículo 44 de la Convención, debido a que se adhiere estrictamente al principio de la doble incriminación.

El delito por el cual se solicita la extradición debe ser sancionado en el Estado requirente con una pena máxima de por lo menos un año de prisión. En la legislación de Marruecos se contempla la posibilidad de detener a la persona cuya extradición se ha solicitado. El número de solicitudes de extradición recibidas por Marruecos por delitos relacionados con la corrupción parece limitado: de 65 solicitudes de extradición recibidas en 2009 y 2010, solamente tres atañían a delitos financieros o delitos de blanqueo de dinero.

Solamente se concede la extradición con la condición de que la persona extraditada no sea acusada, juzgada o arrestada, ni sea objeto de ninguna otra medida que pueda coartar su libertad personal, en virtud de ningún acto cometido antes de la fecha de la extradición, excepto el acto por el cual se extradita a la persona. Además, de acuerdo con la legislación de Marruecos, no se concede la extradición si se estima que el acto por el cual se solicita la extradición es un delito político o se relaciona con un delito político.

Asistencia judicial recíproca

La legislación de Marruecos no contiene ningún texto jurídico específico y separado que se relacione con la asistencia judicial recíproca. En el Código Penal y el Código de Enjuiciamiento Criminal de Marruecos se reglamenta el asunto. Asimismo, en la esfera de la asistencia judicial recíproca, Marruecos ha concertado una serie de acuerdos bilaterales con otros países, a saber, España, los Estados Unidos de América, los Países Bajos, Portugal y Turquía. Esos acuerdos atañen a varias esferas de la cooperación judicial internacional, en vez de limitarse a una esfera en particular. Los expertos examinadores observaron con reconocimiento el número considerable de tratados concertados por Marruecos en la esfera de la asistencia judicial recíproca y alentaron al país a concertar acuerdos similares con otros Estados, a fin de seguir fortaleciendo la cooperación.

La autoridad central designada por el Reino de Marruecos para recibir las solicitudes de asistencia judicial recíproca es el Ministerio de Justicia. Se ha notificado esa designación al Secretario General de las Naciones Unidas. De acuerdo con la legislación de Marruecos, las solicitudes de asistencia judicial recíproca tienen que presentarse por conductos diplomáticos. Sin embargo, en algunos acuerdos bilaterales, como el acuerdo con Portugal, se permite la presentación directa de una solicitud a las autoridades centrales. Además, Marruecos conviene en que, en circunstancias urgentes, las solicitudes se presenten por conducto de la INTERPOL. En cuanto al idioma que se debe utilizar, Marruecos ha informado de que, por regla general, es obligatoria una traducción al árabe, el idioma oficial de Marruecos, de las solicitudes de asistencia judicial recíproca que se presenten.

No es frecuente que se formulen a Marruecos solicitudes de asistencia judicial recíproca por delitos relacionados con la corrupción. En 2009, las autoridades judiciales de Marruecos recibieron 241 solicitudes de asistencia judicial, cuatro de las cuales se relacionaban con el blanqueo de dinero, una con el comercio ilegal de divisas y dos con la malversación o peculado de fondos públicos. En 2010, las autoridades judiciales de Marruecos recibieron 24 solicitudes de asistencia judicial relacionadas con el blanqueo de dinero y dos relacionadas con el delito de soborno.

En la legislación nacional de Marruecos y los tratados bilaterales aplicables se ha incluido una amplia gama de razones por las que se puede solicitar asistencia judicial recíproca. Sin embargo, los expertos examinadores observaron que, al parecer, no estaba adecuadamente prevista la asistencia judicial recíproca destinada a recuperar activos, como se preveía en el párrafo 3 k) del artículo 46 de la Convención.

Marruecos no se niega a prestar asistencia judicial recíproca al amparo del secreto bancario. Ese principio se ha incluido expresamente en los tratados bilaterales aplicables, pero las autoridades judiciales de Marruecos también se han adherido a él en la práctica, accediendo a las solicitudes de que se den a conocer diversas transacciones bancarias, siempre y cuando esas solicitudes se formulen en el contexto de una investigación judicial.

Por término medio, Marruecos necesita tres meses para responder a una solicitud de asistencia judicial recíproca, pero se esfuerza por atender las solicitudes de que se acelere el procedimiento en los casos en que el Estado requirente aduce circunstancias urgentes. En la legislación de Marruecos no se estipulan otras razones para denegar una solicitud que las incluidas en la Convención: no se dará curso a las solicitudes de asistencia judicial si no incumben a la jurisdicción de las autoridades judiciales de Marruecos o si su cumplimiento podría menoscabar la soberanía, la seguridad, el orden público u otros intereses fundamentales del Reino de Marruecos. Si no se da cumplimiento a una solicitud, siempre se notifica ese hecho al Estado requirente y se le comunican las razones de ello.

Cooperación en materia de cumplimiento de la ley

Marruecos informó sobre la existencia de una amplia red de cooperación en materia de cumplimiento de la ley con sus contrapartes internacionales, porque el país es miembro de la INTERPOL y parte en una serie de instrumentos internacionales y acuerdos bilaterales y multilaterales, en que se estipulan la cooperación técnica,

la cooperación en la esfera de la seguridad y el intercambio de información. Entre esos instrumentos figuran memorandos de entendimiento concertados a nivel de departamentos gubernamentales y administraciones públicas nacionales.

Marruecos informó también de que utilizaba plenamente los canales de comunicación disponibles entre los miembros de la INTERPOL. Dado que, el 13 de julio de 2011, la Dependencia de Inteligencia Financiera ingresó en el Grupo Egmont, se prevé que el país recurrirá a las comunicaciones y el intercambio de información por conducto de la base de datos segura del Grupo.

Se ha destacado a varios oficiales de enlace a las embajadas de Marruecos en otros países. Entre sus funciones figuran el fomento de la cooperación y la participación en programas conjuntos de asistencia técnica con sus contrapartes en los Estados anfitriones.

Con respecto a las investigaciones conjuntas, en virtud de un proyecto de reforma del Código de Enjuiciamiento Criminal habría la posibilidad de que las autoridades judiciales competentes, con sujeción a la anuencia previa del Ministro de Justicia y a discreción del Estado parte o los Estados parte interesados, así como en el marco de las directrices judiciales pertinentes a nivel nacional, establecieran órganos mixtos de investigación para realizar pesquisas complejas y a gran escala en otros países, en relación con delitos que requirieran medidas concertadas y centralizadas.

Aunque en la legislación nacional no se reglamentaba la entrega vigilada hasta enero de 2011, Marruecos respondió a varias solicitudes de cooperación judicial que incluían la entrega vigilada en 2009 y 2010, en el contexto de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.

Asistencia técnica

A lo largo del examen, Marruecos indicó varias necesidades de asistencia técnica para aplicar las disposiciones de la Convención. Entre ellas figuran el suministro de compendios de buenas prácticas y lecciones adquiridas, prácticas óptimas, legislación modelo, asistencia en la redacción de textos legislativos y prestación de asesoramiento jurídico para incorporar las disposiciones de la Convención en el derecho interno.

Marruecos observó que, a fin de evaluar el cumplimiento de los capítulos III y IV de la Convención, requeriría programas para evaluar la aplicación de las medidas, así como asistencia para determinar y distribuir el equipo informático apropiado para reunir datos estadísticos pertinentes.

En la esfera de la protección de los testigos, las víctimas y los denunciantes, Marruecos expresó la necesidad de cursos prácticos de capacitación, programas de fomento de la capacidad y asistencia *in situ* de expertos en la lucha contra la corrupción. Asimismo, Marruecos observó que, para aplicar mejor las disposiciones de la Convención en materia de cooperación internacional, sería de ayuda contar con programas para mejorar la capacidad de las autoridades competentes.